GOBIERNOS LOCALES, POLITICAS DE CIUDAD Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO*

Fernando Manero Miguel**
Catedrático de Geografía Humana
Universidad de Valladolid

RESUMEN

Las ciudades constituyen espacios de obligada consideración cuando se trata de comprobar la calidad, coherencia y efectividad de las políticas públicas de ordenación del territorio, entendido como instrumento integrador de las actuaciones que modelan el espacio al servicio del desarrollo económico y la cohesión social. A medida que las demandas de la sociedad incrementan los niveles de exigencia requeridos para que las ciudades cumplan los requisitos propios de un entorno favorable para el funcionamiento de la convivencia y de la actividad humanas, los mecanismos que regulan la toma de decisiones tienden a acomodarse a pautas de gestión sensibles a la complejidad de los problemas a que han de enfrentarse. De ahí la gran versatilidad de las políticas urbanas, obligadas a asumir responsabilidades y acometer la solución de problemas estructurales, lo que las convierte en un factor clave para entender el alcance y significado de los procesos de innovación que actualmente caracterizan a las nuevas directrices estratégicas aplicadas a la ordenación del territorio.

Palabras clave: Políticas Públicas, Ordenación del Territorio, Municipalidades, Políticas Urbanas, Competitividad Territorial

* Este trabajo se integra en los objetivos del Proyecto de Investigación CSO2013-47205-P «Cultura y patrimonio como recursos territoriales: estrategias de desarrollo sostenible e impactos espaciales», del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científico Técnica de Excelencia, Subprograma de Generación del Conocimiento del Ministerio de Economía y Competitividad, y cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

** manero@fyl.uva.es

ABSTRACT

Local Government, City Policies and Spatial Planning.

Cities are spaces to test the public policies's quality, coherence and effectiveness oriented to Spatial Planning as an integrated instrument of the actions that organize the space to the service of the economic development and the social cohesion. The demands of the society are progressively more exigent to create a favorable environment who can improve the coexistence and human activities. Moreover, the administrative instances tend to accommodate its operational work. By these reasons, the public policies are now characterized by its versatility, because it is necessary to undertake structural problems. Thus, public policies are a key element to understand the scope and meaning of the innovation process of the Spatial Planning rules.

Keywords: Public Policies, Spatial Planning, Municipalities, Urban Policies, Territorial competitiveness

INTRODUCCIÓN

Las ciudades, analizadas desde la perspectiva que proporciona la interpretación crítica de sus órganos de gestión y de los instrumentos de intervención asociados a ellos, constituyen espacios de obligada consideración cuando se trata de comprobar la calidad, coherencia y efectividad de las políticas públicas de ordenación del territorio, entendido como instrumento integrador de las actuaciones que lo organizan y estructuran al servicio del desarrollo económico y de la cohesión social, como elementos vertebradores de la cultura territorial y de su proyección a gran escala (Manero, 2014). No en vano, y a medida que las demandas de la sociedad incrementan los niveles de exigencia requeridos para que las ciudades satisfagan adecuadamente los requisitos exigidos en un entorno crítico y a la par favorable a la consecución de objetivos múltiples —es decir, el normal funcionamiento de la convivencia, la mejora de la calidad de vida y del medio ambiente, el fortalecimiento de la conciencia ciudadana y el despliegue de las actividades y estrategias de desarrollo— los mecanismos que regulan la toma de decisiones tienden a acomodarse a pautas de gestión sensibles con la variedad de los problemas a que han de enfrentarse, sujetos a cambios permanentes y a desafíos ineludibles, intensificados en función de las premisas impuestas por las reestructuraciones institucionales y por las lógicas inherentes a la economía globalizada (Valls, 2002: 315).

De esta forma, y sobre la base de las sinergias que se producen entre ellos y de acuerdo con las posibilidades derivadas de las relaciones de proximidad, los espacios urbanos constituyen los más importantes y significativos laboratorios de experimentación de políticas públicas innovadoras, hasta el punto de que de ellos se obtienen las conclusiones y las advertencias más elocuentes, a la par que

útiles, a la hora de canalizar el sentido de la decisión a escalas más amplias. Es así como hay que valorar la complejidad y la versatilidad en que se desenvuelven las políticas urbanas contemporáneas, obligadas a asumir responsabilidades multidimensionales y a acometer la solución de problemas relacionados con la estructuración del espacio público, lo que las convierte en un factor clave para entender el alcance de los procesos de recomposición que, apoyándose en las enseñanzas extraídas de esta escala, caracterizan a las directrices aplicadas a la ordenación integral del territorio.

EL SIGNIFICADO DEL MUNICIPIO COMO FACTOR DETERMINANTE DE LOS PROCESOS SOCIO-ESPACIALES

Cuando se analizan los dinamismos y las tendencias a que se ven sometidos los procesos de transformación urbana y urbanística, nos situamos ante un conjunto de cuestiones intelectuales de extraordinario interés y oportunidad metodológicos, cuya dimensión rebasa el estricto marco urbano para incidir en la forma de concebir y orientar las políticas globales que trascienden a la ciudad, enriquecidos además por el valor que ha de asignarse a la experiencia comparada, poderoso caudal de lecciones que tanto el estudioso del territorio –de ahí la importancia que para el geógrafo ofrece el comportamiento espacial de las administraciones públicas– como el responsable de la gestión pública no deben ignorar. Expresión emblemática del modo de organización espacial de la sociedad contemporánea y punto de anclaje espacial de las transformaciones productivas y de la internacionalización económica, nunca la realidad urbana, sustentada en la urdimbre de intereses y objetivos que configuran el poder local, ha estado expuesta a un cúmulo de conflictos e incertidumbres como los que actualmente la afectan con distintos niveles de complejidad, siempre precisados de cuidadosos diagnósticos y de no menos decididas terapias de tratamiento y evaluación.

Y es que al tiempo que las contradicciones estructurales y los conflictos emanan de los diagnósticos realizados en toda suerte de escenarios regionales, es bien cierto que asistimos en paralelo a la ratificación de la idea de que la ciudad, consolidada como el ámbito de convivencia por antonomasia y de cumplimiento de los objetivos consustanciales al concepto de ciudadanía, se ha convertido sin réplica posible en el elemento esencial del que depende la transformación de la sociedad, de la economía y del territorio. De ahí esa especie de antinomia en la que se encuentra sumido por doquier el hecho urbano contemporáneo, en la medida en que, individualizado como el espacio más representativo de la concentración del poder y de la capacidad de decisión, es a la vez donde más ostensiblemente se ejemplifican y resumen las disfunciones, los riesgos y las carencias, a la par que las potencialidades, del propio sistema que lo sustenta y justifica.

Admitido este hecho, no sorprende que a la dimensión de los numerosos problemas a que se enfrentan la realidad urbana y los responsables directos de su gestión, se hayan sumado resueltamente las posiciones que desde la propia sociedad reclaman la defensa de una serie de valores y derechos comúnmente englobados dentro de los objetivos de bienestar y justicia socio-espacial, conectados con la satisfacción de una serie de demandas básicas que a su vez se identifican con la dignificación del ser humano y de la sociedad de la que forma parte (Leresche, 2001; Del Caz *et alii*, 2002; Kourtit *et alii*, 2015:7). Mas el horizonte hacia el que se proyecta este pulso reivindicativo ya no remite simplemente a los umbrales de competencia atribuibles a las Administraciones de ámbito estatal, regional o provincial, según los casos. Su punto de mira se enfoca con fuerza hacia los órganos específicos del poder local, destinatarios preferentes de las demandas, canalizadores potenciales de las inquietudes ciudadanas y referentes últimos de unas exigencias cuya solución, siempre compleja, viene como principio garantizada por las ventajas que derivan de la proximidad y del conocimiento directo de los problemas. De este modo, la ciudad –y los mecanismos de gestión de base municipal sobre los que se apoya– se erige como la plasmación más elocuente de las múltiples modalidades a que puede abrirse el modo de inserción de la gestión local en las directrices derivadas de los cambios en la configuración de las relaciones entre la administraciones públicas, en la medida en que, a través de ellas, se redefinen los mecanismos de la gobernanza tanto en las escalas urbanas propiamente dichas como en el amplio escenario de perspectivas en que se desenvuelve la práctica compleja de la intervención territorializada.

LA GESTIÓN MUNICIPAL: UN CONJUNTO DE COMPROMISOS Y DESAFÍOS PRETENDIDAMENTE ORIENTADOS AL GOBIERNO EFICIENTE Y EQUITATIVO DE LAS CIUDADES

Es así, pues, como hay que abordar el alcance y el modo de tratamiento de los principales retos a que se enfrenta la realidad urbana y los órganos responsables de su gestión, lo que obliga a establecer una línea de actuación consciente tanto de la dimensión de los problemas planteados como de las incertidumbres del contexto en que éstos han de ser resueltos. A la luz de la experiencia verificada, podemos decir que los compromisos o desafíos a que ha de verse abocada la concepción de la ciudad actual se compendian en torno a varios aspectos claves.

En primer lugar, no sería posible valorar suficientemente la trascendencia de la función social del municipio sin conceder un papel de primer orden a las estrategias encaminadas a luchar contra la exclusión y los fuertes costes y riesgos derivados de los procesos de segregación social y la pobreza (Alcock *et alii*, 1996: 46). Numerosos estudios monográficos efectuados sobre el mundo urbano

latinoamericano ponen de manifiesto hasta qué punto la génesis de estructuras sociales con capacidades diferenciadas de integración en la comunidad se ha convertido no sólo en una cuestión preocupante sino también en el principal motivo causante de la desidentificación de la ciudad para determinados segmentos del complejo social cuya ausencia de incorporación a los intereses generales lo convierte en un elemento potencialmente inestabilizador del sistema. En el mismo sentido, cabría hablar de las negativas repercusiones que, con vistas a una adecuada ordenación del espacio público, resultan de la espiral «exclusión-marginalidad-ghettización» en que se hallan sumidas áreas y sectores sociales muy significativos del espacio urbano, incapaces de insertarse en los procesos de modernización y recualificación funcional (Krätke, 1992:94).

Por otro lado, es evidente el protagonismo desempeñado por el municipio como agente responsable de la gestión eficiente y al propio tiempo equitativa de los recursos locales, lo que le convierte en un factor de engarce y de vertebración entre objetivos que, si pueden mostrarse disociados en otras escalas de la política territorial, constituyen en el ámbito local la expresión de una voluntad de equilibrio y articulación, como principio superador de las situaciones de riesgo colectivo ((Spasiano, 1995:12; Gilbert, 2008: 242). Es evidente que este ensamblaje sólo puede venir dado por la reconstrucción y afianzamiento de la ciudad como espacio público, de acuerdo con la riqueza de connotaciones espacialmente bien definidas que este concepto entraña (Innerarity, 2006: 12). Y es que no sólo permite, al menos en un sentido potencial, cohesionar la estructuración del espacio urbano mediante las múltiples formas o modalidades de interrelación que en él tienden a producirse, sino que también, y como consecuencia de ello, propicia el funcionamiento eficaz de las relaciones sociales así como la acreditación del espacio institucional destinado a garantizar el correcto tratamiento de los procesos de regulación social, económica y cultural. En la medida en que facilita la inscripción de la sociabilidad en el territorio, el espacio público proporciona contenido funcional y operativo al entramado de la acción pública, es decir, el formado por el conjunto de las organizaciones de las que se han dotado las instituciones para intervenir en las distintas estructuras con entidad socio-territorial que conforman la ciudad y asegurar su funcionamiento (Bonetti, 1995).

Y, finalmente, plantear los objetivos desde esta perspectiva equivale a encontrar una justificación lógica, convincente y, desde luego, factible al propósito que debiera impulsar necesariamente a los municipios a la mejora de la competitividad y a la acreditación consecuente de sus ventajas comparativas. Más allá de los convencionalismos en que pudiera materializarse un planteamiento de esta naturaleza, no cabe duda que la búsqueda de un reconocimiento basado en el prestigio y en la ponderación al alza de los valores distintivos se ha convertido en un catalizador primordial de las directrices aplicadas a la gestión

urbana, en modo alguno indiferentes al deseo de promover una marca atractiva y de calidad, que sirva al mismo tiempo como factor aglutinante de la sociedad implicada en la vida de la ciudad, e interesada por la prospectiva del escenario en que se desenvuelve, como marca de identificación cualitativa hacia el exterior en una pugna permanente por la internacionalización de la imagen sobre la base de la aceptabilidad social en la que ha de fundamentarse.

No se trata, por tanto, de alumbrar una visión elitista de la ciudad, que a la postre resulta contraproducente en un entorno abierto al desarrollo de intereses cruzados y concurrentes, sino de plantear el *marketing* urbano como un proceso mediante el cual se produce la acreditación de los elementos urbanos merecedores de galvanizar la atención de los usuarios potenciales, de acuerdo con objetivos claramente establecidos y siempre con la mirada puesta en la mejora progresiva del funcionamiento económico y social de la ciudad, sensible a las posibilidades de la globalización. Y así, la administración de grandes acontecimientos con elevada capacidad de proyección a todas las escalas, la construcción o rehabilitación de edificios emblemáticos y de dotaciones capaces de perfeccionar la calidad de vida y el desarrollo de las actividades de ocio, el perfeccionamiento de la accesibilidad o el impulso a la creatividad y a la capacidad de innovación endógena son algunos de los baluartes esenciales en los que descansa esta pretensión, sólo posible de alcanzar cuando el *marketing* se asienta sobre bases sólidas, resultantes de rigurosos y efectivos métodos de evaluación, y no en efímeras posturas voluntaristas y despilfarradoras que corren el riesgo de agravar el endeudamiento y de esterilizar los esfuerzos realizados cuando no impedir, a la postre, la recuperación del prestigio lesionado.

LA POLÍTICA DE CIUDAD COMO VOLUNTAD INTEGRADORA DE ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN COMPLEMENTARIAS

La diversidad de situaciones en que se encuadra la problemática del hecho urbano contemporáneo dificulta el establecimiento de pautas de actuación generales o de mera aplicación mecánica, al encontrarse, como es lógico, mediatizadas por las particularidades que presenta cada marco espacial de actuación. Insistiendo en lo antes señalado, la flexibilidad y la capacidad de reacción, planteadas ambas con visión prospectiva, se imponen como criterios operativos y válidos, capaces de detectar las amenazas presumibles y de propiciar esa relación de coherencia efectiva que necesariamente debe siempre prevalecer, conforme al equilibrio que vincula a la praxis con la teoría, entre la valoración científica de la realidad y la determinación operativa de los correspondientes mecanismos correctores.

La «política de ciudad»: un concepto con connotaciones claramente definidas

En este contexto resulta interesante llamar a la reflexión y al debate acerca de cuáles podrían ser los ejes básicos de las estrategias a llevar a cabo, sobre todo si consideramos que, más allá de las especificidades a que se han de enfrentar los planes de acción en cada caso, existe sin duda un hilo conductor que, apoyado en la contrastación de experiencias, permite encontrar argumentos de convergencia, que no son sino propuestas encaminadas a la resolución de algunos de los principales problemas compartidos por todas las ciudades en nuestros días. De ahí la importancia adquirida por una noción que en los años noventa ha cobrado una fuerza notable hasta aparecer como la expresión programática en la que confluyen las preocupaciones más acuciantes de la ciudad moderna. Se habla, en efecto, de «política de ciudad» para manifestar, la idea central de una ciudad para todos, en la que todos y cada uno de sus elementos constitutivos revelen la vocación de funcionar juntos, superando la resignación a admitir que las fracturas y las segregaciones sean inevitables, de forma que la política de la ciudad –ambiciosa en palabras pero modesta en sus prácticas (Le Galés, 1995. Cit. por Blanc, 1995: 104)– tiende a afirmarse como la herramienta principal del rechazo a una sociedad y a un territorio fragmentados por procesos de dualización. De ahí esa insistencia en identificarla como la suma de iniciativas expresamente orientadas a la aplicación de intervenciones destinadas a los barrios en dificultad (Damon, 2005: 79). Concebida de esta manera aparece, en definitiva, como una política global y transversal al mismo tiempo, esencialmente centrada en el objetivo básico de articular la rehabilitación de la vivienda, y el tratamiento del desempleo y de los problemas sociales concentrados en determinados barrios con el fin de restaurar el vínculo social y neutralizar así los riesgos consustanciales a una dinámica socio-territorial segregada (Blanc, 1995: 98).

No es aventurado afirmar, por tanto, que la puesta en marcha de una verdadera «política de ciudad», conectada con un enfoque solidario y sostenible del planeamiento, es la única capaz de hacer frente a la antinomia que se produce entre la realidad urbana como espacio de renta, sujeto a los procesos especulativos, o como espacio social (Álvarez Mora, 2015). Tampoco cabe duda que el hecho de concebir las estrategias de integración en estos términos no representa sólo un problema de mera voluntad política, sino que precisa de una redefinición de los mecanismos de intervención que impongan al funcionamiento tradicional del Estado y de las colectividades locales, y al esquema de relaciones que entre ellos pudiera establecerse, unos nuevos comportamientos a fin de adaptarlos a los requerimientos que supone la no segregación funcional del sistema urbano y la articulación entre los centros y las periferias, como plasmación de un esfuerzo que obligue a reconsiderar las solidaridades como uno de los mayores potenciales del desarrollo territorial. En ello estriba esa visión innovadora del hecho

urbano, que se corresponde con la teoría del «Urbanismo Integral», expuesta y desarrollada por Ellin (2006) y con la defensa del derecho a la ciudad y de la recuperación de la cultura del espacio público frente al selectivo «urbanismo de productos, tan proclive a la fragmentación y a la segregación urbana (Borja, 2003:133). Con expresividad ya aludía hace tiempo a este tema Terán Troyano, para quien en relación con las ciudades del futuro, los grandes problemas de la política urbana están en: la organización de las crecientes periferias, la recualificación y revitalización de los núcleos actuales y el engarce entre el centro y las periferias, insistiendo en que «ello comporta no solamente inversiones sino también estrategias voluntarias de organización funcional en el espacio geográfico» (Terán, 1989: 288).

Los instrumentos de participación ciudadana como soporte de las «políticas de ciudad»

En relación con estas mismas ideas, cabría plantear la importancia decisiva que para la ejecución de las estrategias territoriales desplegadas por los municipios posee todo cuanto hace referencia al afianzamiento de los mecanismos de participación y al desarrollo de los principios sustentadores de la democracia local, como fundamento de los márgenes de maniobra que se reconoce a las instancias locales coincidiendo con la redistribución territorial del poder y la puesta en práctica, y normativamente regulada, de los procesos de negociación¹. No olvidemos la relevancia asignada a este principio en la Cumbre sobre el Hábitat (II), una de cuyas conclusiones esenciales alude a la potenciación del papel desempeñado por la sociedad civil, por los agentes locales y por las empresas en los procesos de negociación tanto en las escalas inferiores como en las tradicionalmente reservadas a los Estados, ya que uno de los objetivos esenciales de la descentralización consiste en desarrollar una participación popular más eficaz en los asuntos locales (Manero, 2010). La participación es igualmente uno de los pilares sustanciales de la autonomía local, considerada como una de las piedras angulares de la organización del sector público: no sólo favorece la dignidad del individuo y un sentimiento de comunidad, sino

1. Como subraya Blanc (1995), la participación no tiene, sin embargo, un carácter lineal, toda vez que encierra numerosas modalidades, implica paradojas y, desde luego, no está exenta de posibles contradicciones y conflictos. De ahí la conveniencia de proponer una tipología de la participación en función del grado de asociación de los habitantes con la decisión: de un lado, está la simple *información*, destinada a demostrar que la decisión de los elegidos es la mejor (o menos mala) posible, presentando una vertiente educativa, con la que se pretende poner de relieve los condicionamientos y el margen de maniobra disponible; de otro, está la *codecisión*, casi siempre rechazada por los responsables municipales; y, por último, la *concertación*, que no puede existir sin una redistribución del poder. Blanc advierte que «hay que desconfiar de las caricaturas de concertación y en particular de la dilución de responsabilidades, provocada por la proliferación de estructuras informales de concertación».

que añade igualmente vitalidad a los programas públicos y constituye un medio de ejercer un control local sobre ellos, procurando una mejor adaptación a las necesidades locales (Martins, 1995:447).

Más aún, si se parte de la base de que es precisamente el nivel local el que por su misma razón de ser se muestra más favorable a la participación de los ciudadanos, puede llegarse asimismo a la consideración de que la ventaja que se deriva de esta posibilidad –entre otras, el aumento del nivel de satisfacción de la comunidad con los servicios recibidos, la asunción de las responsabilidades inherentes a la ciudadanía o el enriquecimiento que siempre proporciona la presencia plural y activa en el debate público– puede encontrarse a su vez ampliamente robustecida por los nuevos postulados en que tiende a inscribirse la lógica aplicada a los mecanismos de gestión. Pues no hay que olvidar, a tenor de las experiencias analizadas al respecto en ciudades europeas y latinoamericanas, la intensa recomposición operada en la noción de poder local al quedar simbolizado como el sistema organizativo en el que tienden a articularse las cuatro formas esenciales del poder, es decir, el poder de regulación, el poder de gestión, el poder de control y el poder de la información (Mabogunje, 1995).

La operatividad de esta articulación con vistas al cumplimiento eficiente de los objetivos de reestructuración espacial –en la línea de integración preconizada entre el urbanismo y la ordenación del territorio– pasa necesariamente por el reconocimiento institucional de las colectividades territoriales de base local y de su capacidad de decisión autónoma. Y aunque no es el momento de profundizar aquí en el concepto de autonomía acomodado a las premisas del nuevo contexto en que debe desenvolverse la gestión municipal, no hay que pasar por alto la idea de defenderlo, con mayor énfasis si cabe, como la única garantía posible para el cumplimiento satisfactorio de las atribuciones específicas a las Administraciones municipal responsables de un entramado competencial, en el que convergen y se complementan las decisiones estratégicas, las medidas estructurales, el modelo de gobierno y los instrumentos de control y evaluación aplicados al ejercicio de tales competencias. Si en unos casos conciernen a las actuaciones aplicadas –bien de manera directa o externalizada– a los servicios bajo su responsabilidad exclusiva, en otros atañen directamente a los mecanismos de gestión así como a la evaluación que necesariamente ha de hacerse *ex post* sobre los posibles desfases existentes entre los fines pretendidos y los resultados efectivamente logrados.

Así planteadas, cabe afirmar que, merced a las posibilidades teóricas que implica el concepto de autonomía local, se puede comprender mejor el significado real de la descentralización y los nuevos reequilibrios que introduce, al clarificar sin ambigüedades los perfiles en que se desenvuelve la acción de cada nivel territorial y restituir la capacidad de control ejercida en cada nivel. Al propio tiempo, es innegable que ha abierto nuevas expectativas al desarrollo

de las economías de escala que las instancias locales pueden abordar mediante las fórmulas de concertación estratégica, en torno a las cuales se tejen esos entramados, más o menos densos, de cooperación, coordinación y coalición tan necesarios como pertinentes para el cumplimiento de los objetivos.

Coordinación funcional y cooperación estratégica

Ello nos conduce a otro de los ejes esenciales hacia los que se proyectan las actuales estrategias urbanas en ese afán por afrontar con solvencia y racionalidad los problemas que afectan a la ciudad actual. Frente a la competición, la cooperación: tal parece ser el planteamiento que reiteradamente se suscita en todos los foros teóricos interesados, que contemplan el desarrollo de las políticas colaborativas como una de las principales directrices para la puesta en práctica del proyecto de ciudad².

Es precisamente en este contexto donde adquieren particular interés la reflexión crítica y el debate en torno a las «nuevas tramas del poder local» (Vanier y Scherrer, 1995:8) y del papel asignado al funcionamiento de las interdependencias entre niveles y lógicas de actores (Boix, 2006; Négrier, 2007:13). Hecho evidente si se parte de esa doble contextualización en que necesariamente han de inscribirse los enfoques territoriales, es decir, la que impone la acomodación a la lógica de la competitividad (entendida desde la perspectiva de la competitividad de los territorios) y a la voluntad de mejorar los niveles de calidad de vida, por un lado, y, por otro, la complejidad en que se desenvuelven las relaciones interinstitucionales sumidas en un clima de «resistencias, avances y antagonismos, pero también de alianzas y desbloqueos»: actitudes, en fin, que combinan sus efectos en un movimiento de conjunto que no deja de plantear cambios significativos en la dinámica institucional de los territorios (Graham, 1995: 510). De ellos no están ajenos, por supuesto, los escalones correspondientes al nivel municipal, necesariamente abiertos al espíritu que sobre la cuestión emana del Art. 10 de la Carta Europea de la Autonomía Local³, donde se contempla la doble vertiente —la asociativa y de la cooperación— en que

2. Así quedó subrayado, efectivamente, en el Documento-base de la Conferência sobre Governança Metropolitana (Río de Janeiro, Abril 1993), en el que se que «el concepto de gobernanza enfatiza particularmente la participación en el proceso decisional, reiterando el énfasis de la función tradicional de control del Gobierno como gerente y administrador y promoviendo la cooperación entre los agentes implicados en el proceso, que incluye a los beneficiarios, a los clientes y a las organizaciones sociales» (Mabogunje, 1995: 15)

3. Suscrita en Estrasburgo el 15 de Octubre de 1985, su entrada en vigor en España tendrá lugar el 1 de Marzo de 1989. En su Art. 10 se señala: «1. Las entidades locales tienen el derecho, en el ejercicio de sus competencias, de cooperar, y en el ámbito de la Ley, asociarse con otras entidades locales para la realización de tareas de interés común; 2. El derecho de las entidades locales de integrarse en una asociación para la protección y promoción de sus intereses comunes y el de integrarse en una asociación internacional de entidades locales deben ser reconocidas por cada

pueden plantearse las relaciones intermunicipales, partiendo de la idea de que «la integración en redes de cooperación ha permitido constatar una progresión significativa del sentimiento de pertenencia a una ciudad, que es una de las condiciones básicas para la implicación en un proyecto de ciudad» (Bouinot et Bermils, 1995, 119). De esta forma, la importancia otorgada a la intermunicipalidad, es decir, a la cooperación activa entre municipios –situada en el centro de los desafíos actuales de la descentralización político-administrativa– sólo tiene sentido y fundamento en este marco teórico, hasta el punto de que las posibles disfunciones de la estructura municipal y la cuestión de su obligada racionalización dominan el debate sobre la concepción de las políticas territoriales bajo las premisas que abogan a favor de la concertación, del acuerdo estratégico y del compromiso compartido, forzosamente impuestas además por las implicaciones espaciales derivadas de la búsqueda del equilibrio entre eficiencia y equidad en la prestación de los servicios públicos. Se trata de una cuestión de gran relevancia para la Ordenación del Territorio, por cuanto la magnitud de las tareas y funciones a que se enfrentan las administraciones locales dificulta o desaconseja las actuaciones en solitario. Esta operatividad se encuentra, no obstante, relativizada por el diagnóstico que se haga acerca de la fortaleza de las economías de escala de las que depende la capacidad funcional de un ente territorial. Si es cierto que esta variable aparece matizada en escalas urbanas, donde los desfases en la correlación entre recursos y prestaciones pueden quedar minorados por la propia dimensión del hecho urbano, nadie ignora la importancia estratégica con que se contempla el deseo, latente o explícito, de potenciar los mecanismos de la cooperación intermunicipal –generadora además de dispositivos de información que optimizan el conocimiento de la realidad local– cuando se trata de resolver los graves conflictos y tensiones que distorsionan el funcionamiento de los críticos y siempre inestables espacios periurbanos y, como es evidente también, en las áreas rurales, donde la atomización municipal plantea serios inconvenientes en este sentido.

Y, desde luego, tampoco debemos soslayar la aplicación al ámbito, tan abierto como estimulante, de la cooperación intermunicipal de los principios que abogan por la solidaridad «Norte-Sur», evocando las ideas subrayadas al respecto en la conferencia que sobre «El control del desarrollo urbano: la solidaridad Norte-Sur» tuvo lugar Lisboa entre el 18 y 20 de Octubre de 1989 bajo los auspicios del Consejo de Europa. Son conclusiones que siguen conservando su plena vigencia, ya corroborada, entre otras iniciativas, por la decisión de la Asamblea Mundial de las Ciudades y de las Autoridades Locales para dotarse de una estructura en red. Cabe preguntarse si esta propuesta, que posteriormente ha

Estado; 3. Las entidades locales pueden, en las condiciones eventualmente previstas por la Ley, cooperar con las entidades de otros Estados».

sido reiterada en numerosos foros, va a culminar en una especie de «organización mundial de las ciudades», que mantendría vínculos no sólo con los gobiernos sino con las organizaciones internacionales, pese a las posibles reticencias que pudieran plantearse desde los Estados. De ahí que la postura esgrimida desde las ciudades no pasa tanto por la disminución del papel del Estado como por la modificación de sus pautas de comportamiento estratégico, a fin de adaptarlo a las exigencias de una nueva fase en el sistema de relaciones e interdependencias a todas las escalas. Es una idea que cobró fuerza explícita en la propia cumbre de Estambul, cuando se aludió a la importancia del tránsito de un Estado centralizador y planificador, a otro convertido en factor de estímulo y respaldo de las diferentes opciones y modalidades de la cooperación descentralizada, entre las que los municipios han de desempeñar un papel protagonista de primer orden, teniendo en cuenta que el buen funcionamiento de la cooperación entre los diferentes niveles de gobierno para la ejecución de tareas públicas implica una relación de colaboración basada más sobre la igualdad que sobre una rígida relación de dependencia jerarquizada.

EL SIGNIFICADO DE LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO COMO ARTICULACIÓN OPERATIVA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS AL DESARROLLO ECONÓMICO Y A LA INTEGRACIÓN SOCIO-FUNCIONAL DE LOS TERRITORIOS

Todas estas ideas cobran entidad específica cuando se valora el alcance de sus implicaciones en la perspectiva actual de la Ordenación del Territorio, sometida a una serie de replanteamientos y enfoques renovados que obligan a abordar desde perspectivas y enfoques más innovadores los cambios que tienen lugar en el modo de entender y llevar a la práctica las políticas públicas.

Hacia una renovación del concepto de Ordenación del Territorio

Superadora de un enfoque tradicionalmente fundamentado en las dinámicas territoriales supeditas a la lógica del modelo centralizado y al sistema de producción fordista (Lipietz, 2001: 115), se ve en nuestros días enfrentada a nuevas exigencias (Guigou, 1998: 7; Farinós, 2004:86), lo que se traduce en un intenso proceso de readaptación llevado a cabo al compás del desarrollo normativo, de la redistribución territorial del poder decisional, de la incorporación de prácticas basadas en la horizontalidad en la toma de decisiones y de la incorporación de las sensibilidades que progresivamente se han ido afianzando en las sociedades y en el entramado institucional –de tendencia descentralizada– en el que éstas se sustentan. Y es que, sin duda, ordenar el territorio significa mucho más que la toma de decisiones puntuales relacionadas con la intervención en el territorio, como ya dejó señalado de forma bien explícita la DATAR a comienzos de los noventa (DATAR, 1990, 25). Implica ante todo la defensa de una voluntad

política de vertebración racional, y con visión prospectiva, entre la decisión y la acción, que ha de marcar sin soluciones de continuidad apreciables en el tiempo la propia razón de ser de la política territorial, al constituir la expresión fidedigna de una práctica –una buena práctica– destinada a racionalizar la utilización del espacio al margen de postulados arbitrarios, erráticos u oportunistas sino en estrecha relación de sintonía con las líneas maestras del contexto en que se ha visto incurso en cada momento y de las prioridades determinadas por aquél (Manero, 2014).

No de otra forma podría entenderse, aun dentro de los contrastes que lógicamente afloran cuando se analiza la configuración de las estructuras territoriales en las diferentes escalas del análisis, ese rasgo intrínseco del territorio como portador de proyectos sucesivos e imbricados entre sí, de los que son responsables las sociedades que se han apropiado de él a lo largo del tiempo y lo han transformado, de manera que, al valor de uso inmediato que en un momento determinado le caracteriza, el territorio se distingue a su vez por la disponibilidad de un valor simbólico y testimonial, resultado de la experiencia acumulada y de la gestión llevada a cabo por las generaciones precedentes.

De ahí que, más que una simple técnica, la Ordenación del Territorio, concebida como un sistema integrado de decisiones, entrañe connotaciones que le confieren una eminente naturaleza política y cultural, de la que claramente se ha hecho eco la jurisprudencia al subrayar –tal y como recoge la sentencia 77/1984 del Tribunal Constitucional español– que se trata más de «una política que de una técnica concreta y de una política además de enorme amplitud». Consideración que además aparece reforzada cuando se la valora desde la perspectiva de sus readaptaciones a lo largo del tiempo, pues si resulta incuestionable el hecho de que la personalidad de un país, de una región o de una ciudad se identifican con las estrategias que han modelado, con sus ventajas, aciertos y contradicciones, la organización de su territorio, no es menos cierta la confirmación de que tal cualidad no si no el reflejo patente de «la historia de su política territorial» (Heurteux, 1994:19).

Entendida, en fin, como uno de los grandes desafíos contemporáneos en el contexto de la economía globalizada, representa una opción estratégica primordial, de gran alcance y necesitada de interpretación con visión prospectiva, en cuyo desarrollo intervienen todos los elementos que directa e indirectamente modelan el comportamiento de las dinámicas territoriales sobre la base de sus propias directrices sociales y económicas. Desde esta perspectiva es como habría que plantear la articulación que se produce entre las políticas urbanas que emanan de los modelos de gestión eficiente y equitativa de las ciudades y las líneas maestras esenciales que en la actualidad definen una visión renovada del ordenamiento territorial.

Ordenación del Territorio y estrategias de desarrollo

La base sobre la que se apoya una política territorial bien concebida no puede ser ajena a la voluntad de asentar las decisiones sobre el mejor conocimiento posible de los recursos con vistas a su valorización integral. Es evidente que las posibilidades de una evaluación correcta y coherente de los recursos –entendidos como elementos integradores del capital social y económico territorial y como la expresión de las sinergias establecidas entre las potencialidades geográficas y los saberes locales– aparecen en nuestros días plenamente facilitadas por los procedimientos técnicos capaces de cuantificar las variables, establecer combinaciones de causalidad-efecto, fijar interrelaciones, sinergias y complementariedades, evaluar correctamente la capacidad de acogida del territorio (Sánchez y Ramón, 1992), facilitar la ayuda multicriterio para la decisión participativa así como permitir evaluaciones anticipatorias de los impactos previsiblemente ocasionados por las iniciativas que pudieran acometerse.

Tampoco se puede cuestionar el efecto positivo que la Ordenación del Territorio presenta en la concepción y plasmación de las estrategias de desarrollo hasta el punto de que la propia voluntad ordenancista, reflejada en los objetivos y en la regulación normativa, va ligada a la idea de «organizar el desarrollo económico para el conjunto del territorio en alternativa al simple juego del mercado» (Lipietz, 2001: 111). Dentro de estas coordenadas cabría aludir, por su resonancia económico-espacial, a los esfuerzos estratégicamente encaminados al fortalecimiento de las economías en las que los potenciales endógenos de desarrollo desempeñan un papel primordial. Es una tendencia que conecta con las premisas, suficientemente conocidas y consolidadas, del «desarrollo local», aunque éstas se hayan visto sometidas a un intenso proceso de readaptación como consecuencia de los cambios introducidos por las innovaciones tecnológicas, los acuerdos interempresariales, y la necesidad de afianzar la posición competitiva al compás de la internacionalización de los mercados (Olsson *et alii*, 2015: 138). Y es que el afianzamiento del propio concepto de Sistema Productivo Local (SPL) –entendido como opción de desarrollo enraizada en el entorno y al propio tiempo abierta a alianzas estratégicas de gran amplitud espacial y sectorial, lo que les convierte en los que pudieran definirse como SPL multiterritorializados (Manero, 2000)– ha conseguido insertar el análisis de las experiencias de desarrollo local en la perspectiva, mucho más pertinente y provechosa, de la Ordenación del Territorio, en el sentido de favorecer una interpretación mucho más coherente y mejor sintonizada desde el punto de vista empírico con la pluralidad de las manifestaciones que caracterizan a este tipo de procesos con impacto espacial reconocido. Asimismo la experiencia conduce a destacar la importancia que para la Ordenación del Territorio revisten los mecanismos proclives a la toma de decisiones sobre la base de la cooperación y coordinación de políticas públicas, cuya

razón de ser está en la base misma, como se ha señalado, de los comportamientos estratégicos desplegados desde los municipios. A medida que los sistemas de poder se reestructuran y recomponen en una nueva trama de responsabilidades y competencias es evidente que el ejercicio del poder se inscribe en nuevos campos de acción que obligan a incorporar pautas de ajuste permanente, acomodadas a las respectivas lógicas en juego. De modo que, si en principio se trata de instancias que recaban autonomía y márgenes de maniobra acordes con las atribuciones respectivamente asignadas, la trascendencia de sus actuaciones conlleva la exigencia de una compatibilización necesaria entre la capacidad de iniciativa de que se dispone y la búsqueda de soluciones de compromiso acomodadas a la consecución y defensa de objetivos compartidos (Rousseau, 1995: 879).

La defensa de los principios de coherencia y eficacia es, por tanto, consustancial al buen funcionamiento de la red formada por las instituciones implicadas, que han de asumir la puesta en marcha de líneas de acción ajustadas a los objetivos que derivan de una coordinación interadministrativa, capaz de garantizar el correcto desarrollo de una coordinación funcional. En ello radica precisamente uno de los pilares esenciales de la gobernanza, que manifiesta así el amplio margen de posibilidades funcionales que la caracterizan en orden a la optimización de los recursos, a la puesta en marcha de estrategias de riesgo y balances compartidos, sobre la base de los Modelos de Orientación Estratégica aplicados a las administraciones públicas y al aprovechamiento de las favorables economías de escala territoriales que de ello pudieran derivarse.

Y, por último, dentro de esta secuencia lógica de interdependencias construidas en torno a la visión renovada de la dimensión territorial de las políticas públicas, no hay que ignorar que el objetivo primordial va asociado a la mejora de la calidad y la competitividad de los territorios. Los esfuerzos realizados para clarificar esta noción y darla un contenido preciso nos conducen a una serie de ideas centrales que resultan hoy difícilmente cuestionables (Cook, Fabella, & Lee (2008, 17). La calidad de un territorio aparece indefectiblemente vinculada a sus capacidades, reales o potenciales que permiten asegurar una posición de referencia en un contexto de elevada concurrencia interterritorial. Evidentemente, esta posición es al mismo tiempo una realidad tangible, elaborada a partir de las variables existentes *in situ*, y un atributo asignado desde la perspectiva de quienes contemplan el territorio desde fuera y lo valoran de acuerdo con la percepción creada a lo largo del tiempo y en el momento concreto en el que, dentro de una economía abierta, se plantea su reconocimiento con objetivos de operatividad funcional. Es lo que Camagni acertadamente interpreta como «enfoque de tipo cognitivo-evolutivo» (Camagni, 2006:101), que ejerce un papel complementario respecto a los valores que identifican al territorio al amparo de sus caracteres específicos y de sus posibilidades de atracción para la implantación de actividades generadoras de empleo y valor añadido. Es así como el concepto

de competitividad territorial adquiere consistencia y efectividad como soporte de «los procesos de construcción de conocimientos, de los códigos interpretativos, de los modelos de cooperación y de decisión sobre los que se sustenta la trayectoria innovadora de las empresas» (Camagni, 2006: 104).

El concepto de competitividad territorial introduce, por su lado, matices importantes en la propia idea de competitividad, ya que rebasa, matizándolas, las connotaciones economicistas con las que comúnmente se presenta o las que lo circunscriben a la mera mejora competitiva derivada del bajo coste salarial. En este sentido no cabe establecer una identificación simplificadora entre empresa y territorio, ya que la interpretación de éste no puede quedar restringida a sus magnitudes macroeconómicas, al presentar otros elementos –culturales, sociológicos, políticos– que obligan a superar la consideración del territorio desde la perspectiva estricta del mercado. Dicho de otro modo, la dimensión espacial amplia sensiblemente sus posibilidades interpretativas, ya que permite integrar una gran variedad de elementos en la medida en que, a través de ella, se trata de proporcionar una articulación coherente a los distintos aspectos en los que se fundamenta la capacidad de un territorio para alcanzar una posición consistente y atractiva en el contexto de la economía globalizada, habida cuenta de los decisivos impactos espaciales derivados de tal fenómeno. Visto de este modo, podría hablarse de ordenación competitiva del territorio para significar las cualidades de que éste pudiera dotarse para garantizar el cumplimiento satisfactorio de los objetivos inherentes a la puesta en práctica de estrategias locales al servicio de la innovación. Estrategias que han de ser entendidas, conforme a la idea bien planteada por Cappellin (1988), como la capacidad de un territorio para garantizar «la distribución más eficiente de los recursos entre los distintos sectores productivos y fomentar los cambios tecnológicos que faciliten el incremento de la competitividad de la producción», habida cuenta de que las disparidades en el nivel de vida no son el principal criterio en el que se basan las situaciones críticas en que pudieran encontrarse los espacios a esta escala, sino el desequilibrio o la desproporción existente en cuanto a la utilización de sus respectivos recursos.

Y, entre ellos, responsabilidad primordial corresponde a los que derivan del grado de sintonía y adaptación del territorio a los principios de la *learning economy*, soporte clave de su posición competitiva por cuanto «el conocimiento es el recurso fundamental en la economía contemporánea y el aprendizaje su más importante proceso» (Johnson & Lundvall, 1994: 699). Más aún, proporciona los argumentos teóricos y empíricos para la mejor comprensión del contexto territorial específico en que se inscribe dicho proceso, ya que las capacidades derivadas de este recurso potencial sólo pueden ser valorizadas si existe un entorno propicio para que se manifiesten y para que los procesos de formación y adaptación a las posibilidades de la sociedad del conocimiento puedan desarrollarse en las condiciones más favorables posibles.

A MODO DE CONCLUSIÓN: HACIA UNA CONCEPCIÓN INTEGRADA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS TERRITORIALES. LA NECESARIA ARTICULACIÓN ENTRE FUNDAMENTOS Y ESTRATEGIAS

Las consideraciones anteriores inducen a la defensa de la dimensión integradora que ofrece el modo de abordar el tratamiento y la interpretación de los procesos territoriales, lo que permite valorar el alcance de las interdependencias producidas entre los niveles y categorías en los que se materializan los instrumentos de intervención en las diferentes escalas de la estructura territorial. En este sentido interesa destacar el engarce o encadenamiento lógico que traba en una estructura coherente los aspectos que, debidamente ensamblados, confluyen y otorgan una entidad estratégica específica a cada uno de las elementos de la secuencia señalada. La propuesta presentada en la Fig. 1 trata de ofrecer el sentido que

Figura 1. Elaboración: Fernando Manero, 2015

adquieren estas interrelaciones en función del papel asignado a los principios esenciales de la acción pública sobre la base de los vínculos que en cada caso relacionan los Fundamentos en los que se apoya la gestión con las Estrategias que en cada nivel pueden garantizar su cumplimiento.

Sin necesidad de plantear un análisis pormenorizado del esquema propuesto, baste hacer hincapié en dos aspectos esenciales, que considero pertinente subrayar:

de un lado, en el significado que, en la columna de Fundamentos, tienen los conceptos expresivos de lo que, de manera genérica, pudiera entenderse como el buen gobierno –la gobernanza– del territorio. Quedan precisados de este modo los ejes determinantes que han de encauzar el ejercicio de la decisión, teniendo en cuenta además de qué manera todos ellos establecen entre sí relaciones estrechas de correspondencia, que ponderan, ante todo, el margen de iniciativa de las administraciones responsables, su capacidad para asumir las competencias asignadas, el nivel de conocimiento de los recursos, la preservación de la calidad de los servicios y del patrimonio territorial y los efectos derivados de una actuación concebida a largo plazo y entendida con criterios de sostenibilidad. En cualquier caso, queda claramente resaltada la importancia de la información territorial y el papel que ésta desempeña como aportación sustancial al mejor conocimiento del territorio.

y, de otro, la coherencia se impone al valorar la dimensión empírica que ha de regir las Estrategias consecuentes a los Fundamentos señalados. En este sentido, particular atención merecen, como planteamientos globales, los que específicamente hacen alusión a la coherencia del proyecto territorial –«la ciudad orientada», de la que habla Estévez (2000:17)– a las actuaciones relacionadas con los objetivos inherentes a la noción de servicio público, a la importancia de los instrumentos de participación ciudadana, a la cooperación socio-institucional y a la que pudiera plantearse entre el sector público y el privado como garantía de las posibilidades permitidas por la voluntad de compromiso compartido y, como es obvio, a todo cuanto incida en la práctica sostenible del urbanismo y la defensa de los procesos de integración socio-económica y territorial.

BIBLIOGRAFÍA

- ALCOCK, P., PEARSON, S. & CRAIG, G. (1996). «Citizenship, empowerment and the poor. Local government antipoverty strategies», en *Local Government Policy Making*, 22, 4: 42-51
- ALVAREZ MORA, A. (2015): *La ciudad como producto versus la ciudad como obra, o la realidad urbana entre el espacio de la renta y el espacio social*. Ed. Universidad de Valladolid. Valladolid, 79 pp.
- BLANC, M. (1995): «Politique de ville et démocratie locale. La participation: une transaction le plus souvent différée». *Les Annales de la Recherche Urbaine*. N.º68-69, pp. 98-106

- BONETTI, M. (1995): «La reconstruction de l'espace public. L'enjeu de la gestion politique et de la gestion urbaine», en *Les Annales de la Recherche Urbaine*, n.º 68-69, pp. 14-25
- BOIX, R. (2006): «Redes de ciudades, economías externas y crecimiento», en TARROJA, A. y CAMAGNI, R. (2006): *Una nueva cultura del territorio. Criterios sociales y ambientales en las políticas y el gobierno del territorio*, pp. 251-264
- BORJA, J. (2003): *La ciudad conquistada*. Alianza Ensayo. Madrid, 381 pp.
- BOUINOT, J. et BERMILS, B. (1995): *La gestion stratégique des villes. Entre competition et cooperation*. Armand Colin. Paris,
- CAMAGNI, R. (2006): «Compétitivité territoriale : la recherche d'avantages absolus», en *Reflets et perspectives de la vie économique* n.º XLV.1 : 95-115.
- CAPPELLIN, R. (1988): «Transaction costs and urban agglomeration» en *Revue d'Economie Regionale et Urbaine*, 2: 261-278.
- CAZ, R.; GIGOSOS, P.; SARAVIA, M. (2002): *La ciudad y los derechos humanos. Una modesta proposición sobre derechos humanos y práctica urbanística*, Talasa, Madrid, 133 p.
- COOK, P., FABELLA, R. & LEE, C. (eds.) (2008): *Competitive Advantage and Competition Policy in Developing Countries*, Edward Elgar Publishing, London, 267 pp.
- DAMON, J. (2005): «Objetifs et moyens de la politique de la ville: quelles évolutions?», en *Villes et Territoires. Cahiers Français*, n º328, pp. 79-84.
- D.A.T.A.R. (1990): «Une nouvelle étape pour l'Aménagement du Territoire». *La Documentation Française*, Paris
- ELLIN, N. (2006): *Integral Urbanism*, Routledge.London, 230 pp.
- ESTEVEZ, X. (2000): «La ciudad orientada», en *Ábaco. Revista de Cultura y Ciencias Sociales*, 2.ª época, n.º 20, pp. 17-21.
- FARINÓS, J. (2004): «Challenges of multi-level governance for spatial planning between local and regional levels», en *Quaderns de Política Econòmica*. 2.ª época. N.º 6. 81-95.
- GUIGOU, J. L. (1998): «Récomposer les territoires». En LOINGER, G. et NEMERY, J.C. : *Récomposition et développement des territoires. Enjeux économiques, processus, acteurs*. L'Harmattan, Paris, pp.7: 11.
- GILBERT, C. (2008): «Quand les débats se séparent de l'action. À propos des risques collectifs», en GIRAUD, O. et WARIN, P. : *Politiques publiques et démocratie*. La Découverte, Paris. Pp. 241-259
- GRAHAM, S. (1995): «From urban competition to urban collaboration? The development of interurban telematics networks». *Environment & Planning C: Government and Policy*. N.º 13 (4), pp. 503-524.
- HEURTEUX, C. (1994): *Les entreprises et l'aménagement du territoire. Le «pariside» inutile*. P.U.F. Paris, 214 pp.
- INNERARITY, D. (2006): *El nuevo espacio público*, Espasa Libros, Madrid, 272 pp.
- JOHNSON B. y LUNDVALL, B. (1994): «Sistemas nacionales de innovación y aprendizaje institucional», en *Comercio Exterior* n.º 4, pp. 695-704.
- KOURTIT, K., NIJKAMP, P. & STOUGH, R. (cords) (2015): *The Rise of the City. Spatial Dynamics in the Urban Century*. Elgar, London, 372 pp.

- LERESCHE, J.P. (2001). *Gouvernance et coordination des politiques publiques*. En *Leresche; Gouvernance locale, cooperation et légitimité. Le cas suisse dans une perspective comparée*. Editions Pédone, Pessac, pp. 29-66
- LIPIETZ, A. (2001): «Aménagement du territoire et développement endogène». En *Conseil d'Analyse Économique. Aménagement du Territoire. La Documentation française*: 111-128.
- MABOGUNJE, A. (1995). «Cooperação e governança metropolitana », en *RAM. Revista de Administração Municipal*, n.º 216, pp. 9-25.
- MANERO, F. (2000) «Industria y entorno: el significado de las redes de información en la reestructuración organizativa y espacial de los sistemas productivos». *Industria y Medio Ambiente*. Universidad de Alicante/Asociación de Geógrafos Españoles, Alicante, pp. 425-452.
- MANERO, F. (2010) : «La participación ciudadana en la ordenación del territorio : posibilidades y limitaciones», en *Cuadernos Geográficos*, n.º 47, pp. 47-71
- MANERO, F. (2014) : « Geografía, Ordenación del Territorio y cultura territorial», en *Polígonos Revista de Geografía*, n.º 26, pp.: 5-16
- MARTINS, M.R. (1995): «Size of municipalities, efficiency and citizen participation: a cross-European perspective». *Environment & Planning C: Government and Policy*, n.º 13, pp. 441-458.
- MONTANER, J.M. y SUBIRATS, J. (coords) (2012): *Repensar las políticas urbanas: apuntes para la agenda urbana*. Diputació de Barcelona, Barcelona, 335 pp.
- NÉGRIER, E. (2007): «Introduction générale: penser la contingence territoriale», en FAURE, A. et NÉGRIER, E.: *Les politiques publiques à l'épreuve de l'action locale. Critiques de la territorialisation*, L'Harmattan, Paris, pp. 9-15
- OLSSON, A.R., WESTLUND, H. & LARSSON, J.P. (2015): «Entrepreneurial governance for local growth» en KOURTIT, K., NIJKAMP, P. & STOUGH, R. (coords) (2015): *The Rise of the City. Spatial Dynamics in the Urban Century*, pp. 135-158
- ROUSSEAU, D. (1995) : «Les principes de libre administration locale et d'égalité à l'épreuve de l'aménagement du territoire», en *Revue Française de Droit Administratif*, n.º 5, pp. 876-883.
- SÁNCHEZ PARDO, A. y RAMON MORTE, A. (1992) : «Aplicación de un Sistema de Información Geográfica en un estudio de capacidad de acogida del territorio» , en *Investigaciones Geográficas*, n.º 10. <http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/539>
- VANIER, M. et SCHERRER, F. (1995) : « Les nouvelles mailles du pouvoir local», en *Geocarrefour*, n.º 70-72, pp.: 91-92.
- SPASIANO, M. (1995): *L'organizzazione comunale: paradigmi di efficienza pubblica e buona amministrazione*. Edizioni Scient. Italiane, Napoli, 68 pp.
- TARROJA, A. y CAMAGNI, R. (2006): *Una nueva cultura del territorio. Criterios sociales y ambientales en las políticas y el gobierno del territorio*. Diputació de Barcelona, Barcelona, 750 pp.
- TERÁN, F. (1989): «Las ciudades del futuro y la política regional», en *Política Regional en la Europa de los años 90*. Ministerio de Economía y Hacienda, Madrid, pp. 267-289.
- VALLS, R. (2002): «Administraciones locales y poder local en Europa», en SUBIRATS, J. (coord.): *Redes, territorios y gobierno: Nuevas respuestas locales a los retos de la globalización*. Diputació de Barcelona, Barcelona, pp. 311-319